

**No. 14668. Multilateral**

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS. NEW YORK, 16 DECEMBER 1966 [*United Nations, Treaty Series, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

**Guatemala**

*Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 28 September 2016*

*Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 September 2016*

**N° 14668. Multilatéral**

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW YORK, 16 DÉCEMBRE 1966 [*Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4

**Guatemala**

*Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 28 septembre 2016*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 28 septembre 2016*

[ TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL ]

*Misión Permanente de Guatemala  
ante las Naciones Unidas*

**J/1/1119**

Nueva York, 27 de septiembre de 2016

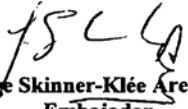
Excelencia:

Tengo el honor de dirigirme a usted para informarle que el 19 de septiembre de 2016, el Gobierno de Guatemala, mediante el Decreto Gubernativo No. 5-2016, publicado el 20 de septiembre de 2016 en el Diario Oficial, declaró Estado de Prevención en todo el territorio de Guatemala, como consecuencia de las fuertes y constantes lluvias que afectan el país.

Posteriormente, el Gobierno de Guatemala, mediante el Decreto Gubernativo No. 6-2016, el 21 de septiembre de 2016 y publicado el 22 de septiembre de 2016, deroga el Decreto Gubernativo No. 5-2016, debido a que generó interpretaciones distintas y extensivas entre la población sobre los fines para los cuales fue emitido el mismo.

En este sentido, solicito sus buenos oficios para comunicarle a los Estados Partes de notificación y Decretos Gubernativos adjuntos.

Aprovecho la ocasión para reiterar a usted la muestras de mi más distinguida consideración y estima.

  
**Jorge Skinner-Klée Arenales**  
**Embajador**  
**Representante Permanente**

*Misión Permanente de Guatemala  
ante las Naciones Unidas*

**J/1/1139**

Nueva York, 3 de octubre de de 2016

Excelencia:

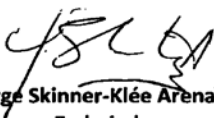
Tengo el honor de dirigirme a usted, en seguimiento a la Carta No. J/1/1119 de fecha 27 de septiembre de 2016, relativa al Decreto No. 5-2016, publicado el 20 de septiembre de 2016 y el Decreto No. 6-2016, publicado el 22 de septiembre de 2016, en donde Guatemala declaró y posteriormente derogó el Estado de Prevención en el país.

Al respecto y conforme al Artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), me permito informar que el Gobierno de Guatemala decidió dejar sin efecto la suspensión de los siguientes artículos a través del Decreto Gubernativo No. 6-2016:

- 1. Artículo 12 Locomoción**
- 2. Artículo 19 Libertad de Expresión**
- 3. Artículo 21 Reunión Pacífica**
- 4. Artículo 22 Asociación**

En este sentido, solicito sus buenos oficios para comunicarle a los Estados Partes de las disposiciones específicas antes mencionadas sobre la derogación.

Aprovecho la ocasión para reiterar a usted la muestras de mi más distinguida consideración y estima.



**Jorge Skinner-Kléé Arenales**  
**Embajador**  
**Representante Permanente**

## **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

Acuérdase declarar el Estado de Prevención, en todo el territorio de la República, especialmente en los puntos de riesgo en municipios, desembocaduras de ríos, ríos, asentamientos, cuencas, ranjones y quebradas.

### **DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 5-2016**

Guatemala, 19 de septiembre de 2016

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

#### **CONSIDERANDO**

Que es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la República, el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala establece y que en casos de desastres naturales, puede cesar la plena vigencia de algunos derechos previa declaratoria del Presidente de la República, en Consejo de Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad y aplicando las medidas legales correspondientes, en lo estrictamente necesario de conformidad con la Ley de Orden Público.

#### **CONSIDERANDO**

Que como consecuencia de las fuertes y constantes lluvias que azotan en todo el territorio de la República de Guatemala, es necesario adoptar urgentemente todas las medidas y acciones para la atención, reconstrucción, rehabilitación de las zonas vulnerables, así como la toma de decisiones y medidas con el propósito de evitar posibles desastres naturales que pongan en peligro a la población en general; para lo cual procede emitir el Decreto que contenga la Declaratoria de Estado de Prevención en todo el territorio de la República de Guatemala.

#### **CONSIDERANDO**

Que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONRED-, es una institución del Estado de Guatemala creada con el propósito de prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y reconstrucción por los daños derivados de los efectos de los desastres; que sus funciones están establecidas en el Decreto Legislativo Número 109-96, siendo un ente coordinador de las entidades públicas y privadas para el cumplimiento de sus finalidades y cuyo criterio debiera de regir preminentemente en las acciones a desarrollarse para atender los desastres naturales y provocados.

#### **POR TANTO**

En el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1º, 2º, 3º, 138, 182 y 183 literal f) de la Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en el artículo 139 de la referida normativa Constitucional; y 1, 2, 6, 8, 25, 28, 31, 32, 34 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley del Orden Público.

EN CONSEJO DE MINISTROS

DECRETA

Artículo 1. Declaratoria. Declarar el Estado de Prevención, en todo el territorio de la República, especialmente en los puntos de riesgo en municipios, desembocaduras de ríos, asentamientos, cuencas, zanjones y quebradas.

Artículo 2. Justificación. El Estado de Prevención se declara, en virtud de la declaratoria de puntos vulnerables declarada por la Coordinadora para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONRED-, a consecuencia de las fuertes y constantes lluvias que han provocado deslaves o derrumbes en algunos municipios y puntos vulnerables de la República de Guatemala, que han producido daños a las viviendas de la población, así como la pérdida de vidas humanas, afectándose así la actividad productiva y el desarrollo humano.

Artículo 3. Objeto. El Estado de Prevención tiene por objeto prohibir y prevenir a la población la permanencia o acceso en determinadas zonas calificadas como vulnerables o de riesgo, así como tomar las medidas necesarias para mitigar los daños que ya fueron causados por las fuertes y constantes lluvias, con el propósito de evitar mayores consecuencias; permitir que en los lugares en que las circunstancias lo ameritan se tomen acciones necesarias para evitar o reducir sus efectos y principalmente, para garantizar la vida, la integridad y la seguridad de la población afectada, en situación vulnerable o de riesgo y salvaguardar sus bienes.

Artículo 4. Plazo. El Estado de Prevención se declara por un plazo de quince días a partir de la vigencia del presente Decreto Gubernativo.

Artículo 5. Derechos restringidos. Se restringe la plena vigencia de los derechos constitucionales reconocidos en los artículos 5 y 26 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por el plazo que se indica en el artículo que antecede.

Artículo 6. Medidas. Durante el plazo del estado de prevención se decretan las medidas siguientes:

- a) Implementar todas las acciones que atiendan los daños derivados de los efectos de las constantes y fuertes lluvias en todo el territorio de la República de Guatemala, la cual ha provocado deslizamientos de tierra que arrastró toneladas de lodo y piedras causando la pérdida de vidas humanas y de sus viviendas en varios municipios de la República, así como prevenir el riesgo que pueda producirse si las lluvias persisten, todo en la forma, circunstancias y lugares que la situación lo requiera; la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONRED-, coordinará al respecto;
- b) Limitar el derecho de libre locomoción, cambiar o mantener la residencia de las personas en los lugares afectados o en riesgo de serlo, siempre que las circunstancias lo demanden;
- c) Establecer cordones sanitarios que limiten la circulación de vehículos e impidan la entrada de personas en las zonas afectadas o en riesgo de serlo, siempre que las circunstancias lo demanden;
- d) Exigir a todos los particulares el auxilio y cooperación que se consideren indispensables para el mejor control de la situación en las zonas afectadas;
- e) Promover el traslado de los pobladores de viviendas que se ubican dentro de las áreas declaradas como de "Alto Riesgo", priorizando el traslado de los habitantes que se localizan en las mismas;
- f) Ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la coordinación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONRED-, adopten todas las medidas necesarias con el objeto de proteger y asegurar la vida, la integridad, la seguridad y los bienes de la población de los lugares indicados y, asimismo, asegurar la prestación de los servicios públicos básicos y esenciales;
- g) Fijar las condiciones bajo las cuales pueden ejercerse los derechos de huelga o paro, o prohibidos o impedidos cuando tuvieren móviles o finalidades políticas;
- h) En las zonas vulnerables o de riesgo, limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos, y en su caso, impedir que se lleven a cabo, aun cuando fueren de carácter privado;
- i) Disolver por la fuerza, sin necesidad de conminación alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se iniciare uso de armas o se recurren a actos de violencia, y;
- j) Exigir a los órganos de publicidad o difusión, que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público. Si la prevención no fuere acatada y sin perjuicio de otras medidas, se procederá por desobediencia contra los responsables.

Artículo 7. Adquisiciones. De acuerdo a lo que establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, mientras esté vigente el Estado de Prevención, no se será obligatoria la licitación ni la cotización a las dependencias y entidades públicas, para la adquisición de bienes, suministros, obras y servicios indispensables para solucionar situaciones derivadas del Estado de Prevención que por el presente Decreto Gubernativo se declara y que hayan ocasionado o pudieran ocasionar, en forma inminente, la suspensión de los servicios públicos. En todo caso, deberán llevarse a cabo las publicaciones que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo 8. Donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y otros relacionados. Las donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y otros relacionados que permitan la atención, rehabilitación y reconstrucción del territorio de la República de Guatemala, deberán ser consignadas y registradas a nombre de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONRED-, debidamente respaldadas por la solicitud de asistencia y ayuda humanitaria internacional emitida a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala y en todos los casos deberán cumplir con los requisitos y normas aduaneras, arancelarias y no arancelarias, vigentes en el país, las que se darán a conocer a los cooperantes internacionales junto con la solicitud de ayuda humanitaria mencionada. En los casos que las donaciones vengán consignadas a otras instituciones públicas u organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales, que estén debidamente acreditadas y representadas en el país, el consignatario deberá realizar el "endoso legal" a favor de -CONRED-, antes de realizar los trámites de importación de las donaciones, las que deberán venir debidamente respaldadas por los requisitos y normas establecidas para la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONRED-. En todos los casos, el ingreso de las donaciones eventuales queda bajo el control y supervisión de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-. Los consignatarios de las donaciones que lleguen al país después de que haya concluido oficialmente el plazo de vigencia del Estado de Prevención, deberán cumplir con los trámites ordinarios para solicitar la exención de impuestos ante la SAT, antes de que ésta autorice el ingreso de las donaciones al país. Esas donaciones no estarán afectas al cumplimiento de lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto. Se dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto Legislativo Número 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado y su Reglamento, que establecen que las donaciones que se reciban quedan exentas de toda clase de impuestos, incluyendo el pago de Derechos Arancelarios de Importación -DAI- y el Impuesto al Valor Agregado -IVA-.

Artículo 9. Colaboración. Todas las entidades y dependencias que integran el Organismo Ejecutivo, así como las indicadas en el artículo 4 del Decreto Número 109-96 del Congreso de la República de Guatemala, deben participar y colaborar en el ámbito de sus competencias con el propósito de hacer efectivas las acciones que se determinan para garantizar a la población la prestación de los servicios públicos esenciales.

Artículo 10. Protección de las personas y sus bienes. El Ministerio de Gobernación tomará inmediatamente, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, para prevenir cualquier acto al margen de la ley y garantizar el mantenimiento de la paz y el orden público.

Artículo 11. Gestión presupuestaria y administrativa. Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que identifique y asigne los espacios presupuestarios para que se dase la emergencia traslade los recursos financieros a las unidades ejecutoras del gasto de conformidad con la Ley.

Artículo 12. Informe. Preséntese al Congreso de la República de Guatemala, informe circunstanciado de los hechos ocurridos y medidas adoptadas durante la emergencia que pueda suscitarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Orden Público.

Artículo 13. Vigencia. El presente Decreto Ejecutivo entra en vigencia inmediatamente y deberá publicarse en el Diario de Centro América.



COMUNIQUESE

JIMMY MORALES CABRERA

JAFETH ERNESTO CABRERA FRANCO  
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA


Francisco Samuel Rivas Lara  
Ministro de Gobernación

Alicia Virginia Costillo Sosa  
Viceministra de Relaciones  
Exteriores  
Encargada del Despacho


William Alberto Mansilla Fernández  
Ministro de la Defensa Nacional



Aldo Estuardo García Morales  
Ministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



Julio Hector Estrada  
Ministro de Finanzas Públicas




José Guillermo Moreno Cordeón  
Ministro de Desarrollo Social



Oscar Hugo López Rivas  
Ministro de Educación



Mario Híndez Montenegro  
Ministro de Agricultura,  
Ganadería y Alimentación



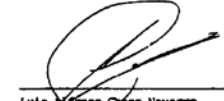
Rubén Estuardo Morales Monroy  
Ministro de Economía



Lucrecia María Hernández Mack  
Ministra de Salud Pública y  
Asistencia Social



Aura Lucía Alegrario Sínca  
de González  
Ministra de Trabajo y  
Previsión Social



Luis Alfonso Chang Navarro  
Ministro de Energía y Minas



José Luis Que Urrutia  
Ministro de Cultura y Deportes



Sydney Alexander Samuel Milson  
Ministro de Ambiente y  
Recursos Naturales



Carlos Adolfo Martínez Guerra  
SECRETARIO GENERAL  
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

# 684 7016; 20-11994-mbr

## PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

### DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 6-2016

Guatemala, 21 de septiembre de 2016

#### EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE

##### CONSIDERANDO

Que en Decreto Gubernativo Número 5-2016 de fecha 19 de septiembre de 2016 y publicado en el Diario de Centro América el 20 de septiembre de 2016, el Presidente de la República en Consejo de Ministros decretó Estado de Prevención por el plazo de quince días en todo el territorio de la República de Guatemala, especialmente en los puntos de riesgo en municipios, desembocaduras de ríos, ríos, asentamientos, cuencas, zarzones y quebradas.

##### CONSIDERANDO

Que el Estado de Prevención anteriormente relacionado, ha generado polémica e interpretaciones distintas y extensivas entre la población sobre los fines para los cuales fue emitido el mismo, por lo que es procedente su derogatoria dictándose la disposición legal correspondiente.

##### POR TANTO

En el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1, 2, 3, 138, 182 y 183 literal f) de la Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en los artículos 139 Constitucional; y 1, 2, 6, 8, 25, 28, 31, 32, 34 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley del Orden Público.

#### EN CONSEJO DE MINISTROS

##### DECRETA

**Artículo 1. Derogatoria.** Se deroga el Decreto Gubernativo Número 5-2016 de fecha 19 de septiembre de 2016 emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, en el cual se decretó Estado de Prevención por el plazo de quince días.

**Artículo 2. Vigencia.** El presente Decreto entra en vigencia inmediatamente y deberá publicarse en el Diario de Centro América.

##### COMUNIQUESE




*Jafeth Ernesto Cabrera Franco*  
JAFETH ERNESTO CABRERA FRANCO

*Mario René Álvarez Calán*  
Mario René Álvarez Calán  
Segundo Viceministro de  
Gobernación  
Encargado del Despacho

*Anamaria DÍguez*  
Anamaria DÍguez  
Viceministra de Relaciones Exteriores  
Encargada del Despacho



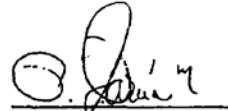




William Aguero Masella Fernández  
Ministro de La Defensa Nacional



Julio López-Sagredo Domínguez  
Ministro de Finanzas Públicas



Aldo Estruado García Morales  
Ministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



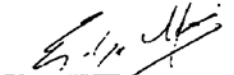
Oscar Ripo López Rivas  
Ministro de Educación




Mario Miranda Montenegro  
Ministro de Agricultura,  
Ganadería y Alimentación




Edwin Giovanni Vastres de León  
Viceministro de Inversión y  
Competencia del Ministerio de  
Economía  
Encargado del Despacho



Edgar Rolando González Barreno  
Viceministro de Salud Pública y  
Asistencia Social  
Encargado del Despacho




José Guillermo Cándara Espino  
Viceministro de Administración  
de Trabajo  
Encargado del Despacho



Luis Alfonso Chang Navarro  
Ministro de Energía y Minas



José Luis Ches Brucela  
Ministro de Cultura y Deportes



Sydney Alexander Samuels Wilson  
Ministro de Asistente y  
Recursos Naturales



José Guillermo Moreno Cerdón  
Ministro de Desarrollo Social



Carlos Adolfo Martínez Güler  
SECRETARIO GENERAL  
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

[TRANSLATION – TRADUCTION]

J/1/1119  
New York, 27 September 2016

Sir,

I have the honour to inform you that on 19 September 2016, by Government Decree No. 5-2016, published on 20 September 2016 in the Official Gazette, the Government of Guatemala declared a state of emergency throughout Guatemala because of the heavy and constant rainfall affecting the country.

Subsequently, by Government Decree No. 6-2016 of 21 September 2016, published on 22 September 2016, the Government of Guatemala repealed Government Decree No. 5-2016, because of the differing and widespread interpretations among the population about the purposes for which the Decree had been issued.

In this connection, I request your good offices to transmit the attached Government Decrees to the Member States.

Accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

(Signed) Jorge Skinner-Klée Arenales  
Ambassador  
Permanent Representative

J/1/1139  
New York, 3 October 2016

Sir,

I have the honour to write to you, further to Note No. J/1/1119 of 27 September 2016 concerning Decree No. 5-2016 published on 20 September 2016 and Decree No. 6-2016 published on 22 September 2016, whereby Guatemala declared and subsequently lifted the national state of emergency.

In this regard and in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, I wish to inform you that the Government of Guatemala has decided to revoke the suspension of the following articles under Government Decree No. 6-2016:

1. Article 12: Movement
2. Article 19: Freedom of expression
3. Article 21: Peaceful assembly
4. Article 22: Association

In this connection, I request your good offices in informing the States Parties of the specific provisions referred to above concerning derogation.

Accept, Sir, the renewed assurances of my highest consideration.

(Signed) Jorge Skinner-Klée Arenales  
Ambassador  
Permanent Representative

**Executive Branch**  
**Office of the President of the Republic**  
**Declaring a state of emergency throughout the territory of the Republic, in particular in at-risk**  
**areas of municipalities, river mouths, rivers, settlements, basins, gorges and ravines.**  
**Government Decree No. 5-2016**  
**Guatemala City, 19 September 2016**

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC,

WHEREAS it is incumbent upon the State and its authorities to guarantee the inhabitants of the Republic full enjoyment of their rights under the Political Constitution of the Republic of Guatemala; the full application of some rights may be suspended during natural disasters, subject to a declaration by the President of the Republic, in concert with the Cabinet, assessing each individual situation according to its nature and gravity and applying such urgent legal measures as are strictly necessary in accordance with the provisions of the Public Order Act,

WHEREAS owing to continuous heavy rainfall throughout the territory of the Republic of Guatemala, all measures and actions must be taken as a matter of urgency to assist, reconstruct and rehabilitate vulnerable areas and take decisions and measures for the purpose of avoiding natural disasters which might jeopardize the population in general, to which end a decree is hereby issued declaring a state of emergency throughout the territory of the Republic of Guatemala,

WHEREAS the National Coordination Office for the Reduction of Natural and Man-made Disasters (CONRED) is an institution of the Guatemalan State established to prevent, mitigate and assist in dealing with the damage caused by disasters and to participate in rehabilitation and reconstruction, its functions are set forth in Legislative Decree No. 109-96 as coordinator of the activities of public and private entities to that end, and it is the overriding authority for measures to address natural or man-made disasters,

THEREFORE, in exercise of the powers conferred on him by articles 1, 2, 3, 138, 182 and 183 (f) of the Political Constitution of the Republic of Guatemala and on the basis of article 139 of the Constitution; and articles 1, 2, 6, 8, 25, 28, 31, 32, 34 and 36 of Decree No. 7 of the National Constituent Assembly: Public Order Act,

IN CONCERT WITH THE CABINET,

DECREES AS FOLLOWS:

Article 1. Declaration. A state of emergency is hereby declared throughout the territory of the Republic, in particular in at-risk areas of municipalities, river mouths, rivers, settlements, basins, gorges and ravines.

Article 2. Justification. The state of emergency is declared further to the identification of vulnerable areas by the National Coordination Office for the Reduction of Natural and Man-made Disasters (CONRED) as a result of landslides caused by continuous heavy rainfall in some municipalities and vulnerable areas of the Republic of Guatemala, which have damaged housing and caused loss of life, impairing production activities and human development.

Article 3. Purpose. The purpose of the national state of emergency is to prohibit and prevent the population from remaining in, or having access to, certain areas classified as vulnerable or at risk; to take the necessary measures to mitigate the damage already caused by continuous heavy rainfall in order to prevent further consequences; to enable, in places where circumstances so warrant, the necessary actions to be taken to avoid or reduce the impact of the rainfall; and, above all, to protect the lives, physical integrity and safety of the affected, vulnerable or at-risk population and to safeguard their property.

Article 4. Period of application. The state of emergency is declared for a period of fifteen (15) days, beginning on the date that the present Decree enters into force.

Article 5. Rights subject to restriction. The full application of the rights set forth in articles 5 and 26 of the Political Constitution of the Republic of Guatemala shall be restricted for the period specified in the preceding article.

Article 6. Measures. During the state of emergency, the following measures shall be taken:

(a) All necessary measures shall be taken to deal with the damage resulting from continuous heavy rainfall throughout the territory of the Republic of Guatemala, which has triggered landslides that have deluged the community with mud and stones, causing loss of life and destroying housing in several municipalities of the Republic, and to mitigate the risk that this could present if the rain persists; these measures shall be taken in such manner, circumstances and places as the situation requires and shall be coordinated by the National Coordination Office for the Reduction of Natural and Man-made Disasters (CONRED);

(b) The right of liberty of movement shall be restricted and persons in affected or seriously at-risk locations shall be either removed from or allowed to remain in their homes, as circumstances require;

(c) Cordons sanitaires shall be established to restrict the movement of vehicles and prevent the entry of persons into affected or seriously at-risk areas, as circumstances require;

(d) All private individuals shall be required to provide the assistance and cooperation deemed essential for controlling the situation in affected areas more effectively;

(e) Residents of housing located in the so-called "high-risk" areas shall be encouraged to relocate, and priority shall be given to residents of those areas;

(f) The civilian and military authorities, under the coordination of the National Coordination Office for the Reduction of Natural and Man-made Disasters (CONRED), shall be ordered to take all necessary measures to protect and safeguard the lives, physical integrity, safety and property of persons living in the places in question and ensure the provision of basic and essential public services;

(g) Conditions on exercising the right to strike or declare work stoppages shall be established; strikes and work stoppages shall be prohibited or impeded if organized for political purposes;

(h) In vulnerable or at-risk areas, open-air meetings, public demonstrations or other events shall be restricted and, as necessary, prevented from taking place even when they are private;

(i) Any group, meeting or public demonstration in which weapons might be used or acts of violence might occur shall be forcibly dispersed without prior warning; and

(j) Media and broadcasting agencies shall be ordered to refrain from publishing anything that in the opinion of the authority would contribute to or incite the disruption of public order. In the event of failure to comply with such prevention measures, and without prejudice to other measures, those responsible shall be charged with disobedience.

Article 7. Procurement. Under Decree No. 57-92 of the Congress of the Republic of Guatemala: State Contracting Act, as long as the state of emergency remains in force, public entities and units shall not be required to seek bids or quotations for the procurement of goods, supplies, works and services essential for addressing situations arising from the state of emergency declared by the present Government Decree which have caused, or could imminently cause, the suspension of public services. In any case, procurement processes shall be publicized as required by the implementing regulations of the State Contracting Act.

Article 8. Donations, humanitarian aid and assistance, recovery and related assistance. Donations, humanitarian aid and assistance, recovery and related assistance for providing assistance to, rehabilitating and rebuilding the territory of the Republic of Guatemala shall be addressed to and registered with the National Coordination Office for the Reduction of Natural and Man-made Disasters (CONRED) and duly supported by a request for international humanitarian aid and assistance issued through the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Guatemala, and shall in all cases comply with the customs, tariff and non-tariff requirements and rules in force in the country, which shall be communicated to international cooperating agencies along with the request for humanitarian assistance. Where donations are addressed to other public institutions or to national or international non-governmental organizations duly accredited and represented in the country, the addressee shall endorse them over to the National Coordination Office before undertaking the procedures for importing the donations. Imported donations shall be duly supported by the rules and requirements established by the National Coordination Office. In all cases, the entry of exempt donations shall remain under the control and supervision of the Tax Administration Superintendency (SAT). Recipients of donations that reach the country after the state of emergency has formally ended will have to comply with the ordinary procedures for applying to the Superintendency for a tax exemption before the latter can authorize the entry of those donations into Guatemala. Such donations shall be governed not by Decree No. 101-97 of the Congress of the Republic: Budget Act, but by Legislative Decree No. 109-96: Act establishing the National Coordination Office for the Reduction of Natural and Man-made Disasters and its implementing regulations, under which donations are exempt from all taxes, including import tariff duties and value-added tax.

Article 9. Cooperation. All entities and units of the executive branch, as well as those indicated in article 4 of Decree No. 109-96 of the Congress of the Republic of Guatemala, shall participate and cooperate within their sphere of competence in order to ensure that the measures decided upon for guaranteeing the provision of essential public services to the population are implemented.

Article 10. Protection of persons and their property. The Ministry of the Interior shall take all necessary measures forthwith to ensure the safety of persons and their property, prevent any unlawful act and guarantee the maintenance of peace and public order.

Article 11. Administrative and budgetary management. The Ministry of Public Finance is hereby authorized to identify and allocate such budgetary resources as are necessary to ensure that in

case of emergency, financial resources can be transferred to spending units in accordance with the law.

Article 12. Report. In accordance with the provisions of article 32 of the Public Order Act, a detailed report on the events that occurred and the measures that were taken during the emergency shall be submitted to the Congress of the Republic of Guatemala.

Article 13. Entry into force. The present Government Decree shall enter into force immediately and shall be published in the *Diario de Centro America* (Central American Gazette).

IT SHALL BE KNOWN AND COMMUNICATED.

(Signed) Jimmy Morales Cabrera  
President of the Republic of Guatemala

(Signed) Jafeth Ernesto Cabrera Franco  
Vice-President of the Republic

(Signed) Francisco Manuel Rivas Lara  
Minister of the Interior

(Signed) Alicia Virginia Castillo Sosa  
Deputy Minister for Foreign Affairs  
Acting Minister

(Signed) Williams Agberto Mansilla Fernández  
Minister of National Defence

(Signed) Aldo Estuardo García Morales  
Minister of Communications, Infrastructure and Housing

(Signed) Julio Héctor Estrada  
Minister of Public Finance

(Signed) José Guillermo Moreno Cerdón  
Minister of Social Development

(Signed) Oscar Hugo López Rivas  
Minister of Education

(Signed) Mario Méndez Montenegro  
Minister of Agriculture, Livestock and Food

(Signed) Rubén Estuardo Morales Monroy  
Minister of the Economy

*(Signed)* Lucrecia María Hernández Mack  
Minister of Public Health and Social Assistance

*(Signed)* Aura Leticia Teleguario Sincal de González  
Minister of Labour and Social Welfare

*(Signed)* Luis Alfonso Chang Navarro  
Minister of Energy and Mines

*(Signed)* José Luis Chea Urruela  
Minister of Culture and Sports

*(Signed)* Sydney Alexander Samuels Milson  
Minister of the Environment and Natural Resources

*(Signed)* Carlos Adolfo Martínez Gularte  
Secretary-General of the Office of the President of the Republic



**Executive Branch  
Office of the President of the Republic  
Government Decree No. 6-2016  
Guatemala City, 21 September 2016**

THE VICE-PRESIDENT OF THE REPUBLIC, in his capacity as Acting President

WHEREAS in Government Decree No. 5-2016 of 19 September 2016, published in the *Diario de Centro America* (Central American Gazette) on 20 September 2016, the President of the Republic, in concert with the Cabinet, declared a state of emergency throughout the territory of the Republic for a period of fifteen (15) days, in particular in at-risk areas of municipalities, river mouths, rivers, settlements, basins, gorges and ravines,

WHEREAS the aforesaid state of emergency has given rise to controversy and has been the subject of varying and wide-ranging interpretations among the population as to the purposes for which it was declared and should therefore be lifted under a corresponding legal provision,

THEREFORE, in exercise of the powers conferred on him by articles 1, 2, 3, 138, 182 and 183 (f) of the Political Constitution of the Republic of Guatemala and on the basis of article 139 of the Constitution; and articles 1, 2, 6, 8, 25, 28, 31, 32, 34 and 36 of Decree No. 7 of the National Constituent Assembly: Public Order Act,

IN CONCERT WITH THE CABINET,

DECREES AS FOLLOWS:

Article 1. Government Decree 5-2016 of 19 September 2016 issued by the President of the Republic in concert with the Cabinet, declaring a state of emergency for fifteen (15) days, is hereby revoked.

Article 2. Entry into force. The present Decree shall enter into force immediately and shall be published in the *Diario de Centro America* (Central American Gazette).

IT SHALL BE KNOWN AND COMMUNICATED.

(Signed) Jafeth Ernesto Cabrera Franco

(Signed) Mario René Álvarez Galán  
Second Deputy Minister of the Interior  
Acting Minister

(Signed) Anamaría Diéguez  
Deputy Minister for Foreign Affairs  
Acting Minister

(Signed) Williams Agberto Mansilla Fernández  
Minister of National Defence

*(Signed)* Julio Héctor Estrada Domínguez  
Minister of Public Finance

*(Signed)* Aldo Estuardo García Morales  
Minister of Communications, Infrastructure and Housing

*(Signed)* Oscar Hugo López Rivas  
Minister of Education

*(Signed)* Mario Méndez Montenegro  
Minister of Agriculture, Livestock and Food

*(Signed)* Edwin Giovanni Verbena de León  
Deputy Minister of Investment and Competition  
Ministry of the Economy  
Acting Minister

*(Signed)* Edgar Rolando González Barreno  
Deputy Minister of Public Health and Social Assistance  
Acting Minister

*(Signed)* José Guillermo Gándara Espino  
Deputy Minister of Labour Administration  
Acting Minister

*(Signed)* Luis Alfonso Chang Navarro  
Minister of Energy and Mines

*(Signed)* José Luis Chen Urruela  
Minister of Culture and Sports

*(Signed)* Sydney Alexander Samuels Milson  
Minister of the Environment and Natural Resources

*(Signed)* José Guillermo Moreno Córdón  
Minister of Social Development

*(Signed)* Carlos Adolfo Martínez Gularte  
Secretary-General of the Office of the President of the Republic

[TRANSLATION – TRADUCTION]

J/1/1119

New York, le 27 septembre 2016

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que le 19 septembre 2016, par le décret N°5-2016, publié le 20 septembre 2016 au Journal Officiel, le Gouvernement du Guatemala a déclaré l'état d'urgence sur l'ensemble de son territoire national, suite aux pluies fortes et continues qui frappent le pays.

Par la suite, le 21 septembre 2016, le Gouvernement du Guatemala a abrogé le décret exécutif N° 5-2016 par le décret exécutif N° 6-2016, publié le 22 septembre 2016, en raison de la confusion qu'il suscitait au sein de la population quant aux fins de son émission.

Je vous prie à cet égard d'user de vos bons offices pour communiquer aux États parties cette notification et les décrets exécutifs ci-joints.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma très haute considération.

L'Ambassadeur,  
Représentant permanent  
(Signé) Jorge Skinner-Klée Arenales

J/1/1139  
New York, le 3 octobre 2016

Monsieur,

J'ai l'honneur de m'adresser à vous au sujet de la lettre n° J/1/1119 en date du 27 septembre 2016, concernant le décret n° 5-2016 publié le 20 septembre 2016 et le décret n° 6-2016 publié le 22 septembre 2016, par lesquels le Guatemala a déclaré puis abrogé l'état d'urgence dans le pays.

Conformément à l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, je vous informe que le Gouvernement du Guatemala a décidé, par le décret exécutif n° 6-2016, de lever les dérogations aux dispositions des articles suivants :

1. Article 12 relatif à la liberté de circulation
2. Article 19 relatif à la liberté d'expression
3. Article 21 relatif au droit de réunion pacifique
4. Article 22 relatif à la liberté d'association

À cet égard, je vous serais reconnaissant de bien vouloir communiquer aux États parties les dispositions susmentionnées auxquelles il avait dérogé.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma très haute considération.

L'Ambassadeur,  
Représentant permanent  
(Signé) Jorge Skinner-Kléé Arenales

**Organe exécutif**  
**Cabinet du Président de la République**  
**L'état d'urgence est déclaré sur tout le territoire de la République, en particulier dans**  
**les zones à risque des municipalités et les zones habitées, aux embouchures des fleuves**  
**et aux abords des fleuves, des bassins, des canaux et des cours d'eau.**  
**Décret n° 5-2016**  
**Guatemala, le 19 septembre 2016**

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

CONSIDÉRANT que l'État et ses autorités sont tenus de garantir aux habitants du Guatemala la pleine jouissance des droits consacrés dans la Constitution politique de la République du Guatemala et qu'en cas de catastrophe naturelle, le plein exercice de certains droits peut être suspendu, sous réserve d'une déclaration du Président de la République en Conseil des ministres décrivant la nature et la gravité de la situation et sous réserve que pareilles mesures juridiques ne soient prises que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires, conformément à la loi sur l'ordre public,

CONSIDÉRANT que, suite aux fortes pluies qui s'abattent sans discontinuer sur l'ensemble du territoire de la République du Guatemala, toutes les mesures possibles doivent être adoptées d'urgence pour aider, reconstruire et remettre en état les zones vulnérables, et que des décisions et des mesures doivent être prises afin d'éviter d'éventuelles catastrophes naturelles qui mettraient en danger la population en général et qu'à cette fin, il convient de prendre un décret déclarant l'état d'urgence sur tout le territoire de la République du Guatemala,

CONSIDÉRANT que l'organe de coordination nationale des interventions en situation de catastrophe d'origine naturelle ou artificielle (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado ou CONRED) est une institution de l'État guatémaltèque créée dans l'objectif de prévenir et limiter les dégâts causés par les catastrophes et d'appuyer les interventions à cet égard ainsi que de faciliter le relèvement et la reconstruction, et vu ses fonctions énoncées dans le décret législatif n° 109-96, lui conférant la responsabilité de coordonner l'action des pouvoirs publics et du secteur privé à cette fin et déclarant la primauté de son autorité s'agissant des mesures à prendre en cas de catastrophe naturelle et anthropique,

EN CONSEQUENCE, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles premier, 2, 3, 138, 182 et 183 f) de la Constitution politique de la République du Guatemala, et se fondant sur l'article 139 de la Constitution et sur les articles premier, 2, 6, 8, 25, 28, 31, 32, 34 et 36 du décret n° 7 de l'Assemblée nationale constituante portant loi sur l'ordre public,

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU,

DÉCRÈTE :

Article premier. Déclaration. L'état d'urgence est déclaré sur tout le territoire de la République, en particulier dans les zones à risque des municipalités et les zones habitées, aux embouchures des fleuves et aux abords des fleuves, des bassins, des ravins et des gorges.

Article 2. Justification. Suite à la désignation, par l'organe de coordination CONRED, de zones vulnérables, l'état d'urgence est déclaré en raison des pluies fortes et persistantes ayant entraîné, dans certaines municipalités et zones vulnérables de la République du Guatemala, des glissements de terrain et des effondrements, qui ont endommagé des habitations et causé des pertes en vies humaines et qui ont entravé les activités touchant la production et le développement humain.

Article 3. Objectif. L'état d'urgence a pour objectif de mettre en garde la population et de lui interdire de séjourner dans certaines zones sensibles ou à risque ou d'y accéder, et d'adopter les mesures nécessaires pour réduire les dommages déjà occasionnés par les pluies fortes et persistantes, afin d'éviter des conséquences plus graves ; de permettre la prise de mesures dans les zones où cela est justifié, visant à éviter ou réduire les effets des pluies et, avant tout, à préserver la vie et l'intégrité physique des populations touchées, en situation vulnérable ou à risque, à assurer leur sécurité et à protéger leurs biens.

Article 4. Durée d'application. L'état d'urgence s'appliquera pour une durée de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5. Droits soumis à des restrictions. Le plein exercice des droits prévus par les articles 5 et 26 de la Constitution politique de la République du Guatemala sera restreint pendant la période visée à l'article précédent.

Article 6. Mesures. Pendant la période où l'état d'urgence est en vigueur, les mesures ci-après sont appliquées :

a) Engagement de toute action nécessaire pour remédier aux dommages causés par les glissements de terrain, notamment les coulées de boue et les éboulements, provoqués par les pluies fortes et persistantes tombées sur tout le territoire de la République du Guatemala, qui ont entraîné des pertes en vies humaines et la destruction d'habitations dans plusieurs municipalités de la République, et pour limiter les risques en cas de pluies persistantes, toute action devant être menée selon certaines modalités et circonstances et dans certains lieux compte tenu de chaque situation particulière, l'organe CONRED coordonnant les activités correspondantes ;

b) Restriction du droit à la liberté de circulation et du droit au changement ou maintien de résidence des personnes se trouvant dans les localités touchées ou à risque, dans la mesure où les circonstances l'exigent ;

c) Mise en place de cordons sanitaires limitant la circulation des véhicules et empêchant l'entrée des personnes dans les zones touchées ou à risque, dans la mesure où les circonstances l'exigent ;

d) Obligation faite à tout particulier de fournir l'assistance et la coopération jugées indispensables pour maîtriser plus efficacement la situation dans les zones touchées ;

e) Encouragement au changement de résidence ciblant les riverains des zones dites à « haut risque », la priorité étant donnée aux résidents de ces zones ;

f) Ordre aux autorités civiles et militaires, en coordination avec l'organe compétent, CONRED, de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger et préserver la vie et l'intégrité

physique des résidents concernés, assurer leur sécurité et protéger leurs biens et garantir la fourniture des services publics essentiels de base ;

g) Établissement des conditions dans lesquelles les droits de grève ou d'arrêt de travail peuvent s'exercer ou bien être interdits ou entravés lorsqu'ils sont motivés par des mobiles ou finalités politiques ;

h) Dans les zones vulnérables ou à risque, restrictions à la tenue de réunions en plein air, de manifestations publiques ou d'autres événements et, le cas échéant, interdiction de les organiser, même s'ils revêtent un caractère privé ;

i) Dispersion par la force, sans injonction préalable, de tout groupe, réunion ou manifestation publique dont les participants emploient des armes ou recourent à des actes de violence ; et,

j) Obligation faite aux organes de publicité ou de diffusion d'éviter toutes les publications qui, de l'avis des autorités, contribuent ou incitent à porter atteinte à l'ordre public. Si la mesure de prévention n'est pas respectée et sans préjudice d'autres mesures, les responsables seront poursuivis pour refus d'obtempérer.

Article 7. Marchés publics. Conformément au décret n° 57-92 du Congrès de la République du Guatemala portant loi sur les marchés publics, tant que l'état d'urgence reste en vigueur, les organismes et services publics ne sont pas tenus d'appliquer les procédures d'appel d'offres ou de demande de devis pour acquérir des biens et fournitures ou commanditer des travaux ou services qui sont indispensables pour remédier aux situations relevant de l'état d'urgence déclaré par le présent décret, situations qui ont provoqué ou pourraient provoquer incessamment l'interruption des services publics. En tout état de cause, les marchés publics sont publiés conformément à la réglementation de l'application de la loi sur les marchés publics.

Article 8. Dons, aide et assistance humanitaires, assistance au relèvement et autre assistance connexe. Les dons, l'aide et l'assistance humanitaires, l'assistance au relèvement et toute autre forme d'assistance connexe, qui contribuent à aider, remettre en état et reconstruire le territoire de la République du Guatemala doivent être enregistrés auprès de l'organe de coordination, CONRED, et dûment justifiés par une demande d'aide et assistance humanitaires internationales émanant du Ministère des affaires étrangères de la République du Guatemala et doivent, dans tous les cas, être conformes aux us, barrières tarifaires et non tarifaires et règles en vigueur dans le pays, dont seront informés les organismes de coopération internationale lorsqu'ils recevront la demande d'assistance humanitaire internationale. Lorsque des dons sont destinés à d'autres institutions publiques ou à des organisations non gouvernementales nationales ou internationales dûment accréditées et représentées dans le pays, le destinataire doit les enregistrer auprès de l'organisme CONRED avant d'entreprendre les procédures d'importation. Les dons importés doivent être dûment conformes aux règles et critères arrêtés par l'organisme CONRED. Dans tous les cas, l'entrée de dons exonérés demeure sous le contrôle et la supervision de la Direction générale de l'administration des impôts. Les bénéficiaires de dons devant entrer dans le pays après la date officielle de fin de l'état d'urgence seront tenus de suivre les procédures ordinaires de demande d'exonération fiscale auprès de la Direction générale de l'administration des impôts pour que celle-ci puisse autoriser l'entrée des dons au Guatemala. Pareils dons ne sont pas soumis au décret n° 101-97 du Congrès de la République portant loi budgétaire, mais sont régis par le décret législatif n° 109-96 portant loi et règlement d'application relatif à l'organisme CONRED, qui dispose que les dons sont exonérés de tous impôts, y compris des droits de douane à

l'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 9. Coopération. Tous les organes et services de l'exécutif, ainsi que ceux visés à l'article 4 du décret n° 109-96 du Congrès de la République du Guatemala, sont tenus de participer et coopérer dans leur domaine de compétence, afin de veiller à ce que les mesures décidées afin de garantir la fourniture des services publics essentiels à la population soient effectivement mises en œuvre.

Article 10. Protection des personnes et de leurs biens. Le Ministère de l'intérieur prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et les biens des personnes, prévenir tout acte contraire à la loi et assurer le maintien de la paix et de l'ordre public.

Article 11. Gestion administrative et budgétaire. Le Ministère des finances publiques est, par le présent décret, habilité à recenser et allouer les ressources budgétaires nécessaires afin que face à une situation d'urgence, le Ministère transfère des fonds aux services devant les dépenser conformément à la loi.

Article 12. Rapport. Conformément à l'article 32 de la loi sur l'ordre public, un rapport circonstancié sur les faits survenus et les mesures prises pendant la situation d'urgence doit être soumis au Congrès de la République du Guatemala.

Article 13. Entrée en vigueur. Le présent décret entre en vigueur immédiatement et sera publié dans le Journal officiel d'Amérique centrale.

Le Président de la République du Guatemala  
(Signé) Jimmy Morales Cabrera

Le Vice-Président de la République  
(Signé) Jafeth Ernesto Cabrera Franco

Le Ministre de l'intérieur  
(Signé) Francisco Manuel Rivas Lara

La Vice-Ministre des affaires étrangères  
Responsable de cabinet  
(Signé) Alicia Virginia Castillo Sosa

Le Ministre de la défense nationale  
(Signé) Williams Agberto Mansilla Fernández

Le Ministre de la communication, de l'infrastructure et du logement  
(Signé) Aldo Estuardo García Morales

Le Ministre des finances publiques  
(Signé) Julio Héctor Estrada



Le Ministre du développement social  
(*Signé*) José Guillermo Moreno Córdón

Le Ministre de l'éducation  
(*Signé*) Oscar Hugo López Rivas

Le Ministre de l'agriculture, de l'élevage et de l'alimentation  
(*Signé*) Mario Méndez Montenegro

Le Ministre de l'économie  
(*Signé*) Rubén Estuardo Morales Monroy

Le Ministre de la santé publique et de l'assistance sociale  
(*Signé*) Lucrecia María Hernández Mack

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale  
(*Signé*) Aura Leticia Teleguario Sincal de González

Le Ministre de l'énergie et des mines  
(*Signé*) Luis Alfonso Chang Navarro

Le Ministre de la culture et des sports  
(*Signé*) José Luis Chea Urruela

Le Ministre de l'environnement et des ressources naturelles  
(*Signé*) Sydney Alexander Samuels Milson

Le Secrétaire général de la Présidence de la République  
(*Signé*) Carlos Adolfo Martínez Gularte

**Organe exécutif**  
**Cabinet du Président de la République**  
**Décret n° 6-2016**  
**Guatemala, le 21 septembre 2016**

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, agissant en qualité de Président,

CONSIDÉRANT que par le décret n° 5-2016 pris en Conseil des ministres le 19 septembre 2016 et publié le 20 septembre 2016 dans le Journal officiel d'Amérique centrale, le Président de la République a proclamé l'état d'urgence pour une durée de quinze jours sur tout le territoire de la République du Guatemala, en particulier dans les zones à risque des municipalités et les zones habitées, aux embouchures des fleuves et aux abords des fleuves, des bassins, des canaux et des cours d'eau,

CONSIDÉRANT que l'état d'urgence précité a donné lieu à des polémiques et à des interprétations variées et très larges au sein de la population sur les objectifs qui ont motivé sa proclamation, et qu'il convient de ce fait d'abroger le décret susvisé au moyen de la disposition légale correspondante.

EN CONSEQUENCE, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles premier, 2, 3, 138, 182 et 183 f) de la Constitution politique de la République du Guatemala, et se fondant sur l'article 139 de la Constitution et sur les articles premier, 2, 6, 8, 25, 28, 31, 32, 34 et 36 du décret n° 7 de l'Assemblée nationale constituante portant loi sur l'ordre public,

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU,

DÉCRÈTE :

Article premier. Abrogation. Le décret 5-2016 déclarant l'état d'urgence pour une durée de quinze jours, pris par le Président de la République en Conseil des ministres le 19 septembre 2016, est abrogé.

Article 2. Entrée en vigueur. Le présent décret entre en vigueur immédiatement et sera publié dans le Journal officiel d'Amérique centrale.

Le Vice-Président de la République, agissant en qualité de Président  
(*Signé*) Jafeth Ernesto Cabrera Franco

Le deuxième Vice-Ministre de l'intérieur  
Responsable de cabinet  
(*Signé*) Mario René Alvarez Galán

La Vice-Ministre des affaires étrangères  
Responsable de cabinet  
(*Signé*) Anamaria Diéguez

Le Ministre de la défense nationale  
(*Signé*) Williams Agberto Mansilla Fernández

Le Ministre des finances publiques  
(*Signé*) Julio Héctor Estrada Domínguez

Le Ministre de la communication, de l'infrastructure et du logement  
(*Signé*) Aldo Estuardo García Morales

Le Ministre de l'éducation  
(*Signé*) Oscar Hugo López Rivas

Le Ministre de l'agriculture, de l'élevage et de l'alimentation  
(*Signé*) Mario Méndez Montenegro

Le Vice-ministre des investissements et de la concurrence  
Responsable de cabinet au Ministère de l'économie  
(*Signé*) Edwin Giovanni Verbena de León

Le Vice-ministre de la santé publique et de l'assistance sociale  
Responsable de cabinet  
(*Signé*) Edgar Rolando González Barreno

Le Vice-ministre du travail  
Responsable de cabinet  
(*Signé*) José Guillermo Gándara Espino

Le Ministre de l'énergie et des mines  
(*Signé*) Luis Alfonso Chang Navarro

Le Ministre de la culture et des sports  
(*Signé*) José Luis Chea Urruela

Le Ministre de l'environnement et des ressources naturelles  
(*Signé*) Sydney Alexander Samuels Milson

Le Ministre du développement social  
(*Signé*) José Guillermo Moreno Córdón

Le Secrétaire général de la Présidence de la République  
(*Signé*) Carlos Adolfo Martínez Gularte

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

**Peru**

*Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:  
14 September 2016*

*Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 14 September 2016*

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE  
L'ARTICLE 4

**Pérou**

*Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 14 septembre 2016*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 14 septembre 2016*

[ TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL ]

Misión Permanente del Perú  
ante las Naciones Unidas



Permanent Mission of Peru to  
the United Nations

7-1-SG/ 75

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas presenta sus atentos saludos a la Secretaría General de las Naciones Unidas – Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 4° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene a honra informar que, mediante Decreto Supremo N° 066-2016-PCM publicado el pasado 27 de agosto, cuya copia se acompaña, se prorrogó por cuarenta y cinco días, a partir del 30 de agosto de 2016, el Estado de Emergencia en la Provincia Constitucional del Callao.

Durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, complementados en los incisos 9 y 24 apartado f) del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú, y en los Artículos 17° y 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente.

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas aprovecha la oportunidad para renovar a la Secretaría General de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta distinguida consideración.

Nueva York, 14 de septiembre de 2016



A la Secretaría General de la  
Organización de las Naciones Unidas  
Oficina de Asuntos Jurídicos  
Sección de Tratados  
Fax 3.3693  
**Nueva York.-**

**Prórroga de Estado de Emergencia  
declarado en la Provincia Constitucional del  
Callao**

**DECRETO SUPREMO  
N° 066-2016-PCM**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú, prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo íntegro y equilibrado de la Nación;

Que, asimismo, el artículo 137 de la Carta Magna establece que el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción señalados en dicho artículo, entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, decretado en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio;

Que, es obligación del Gobierno Constitucional garantizar el derecho de los ciudadanos al orden, a la tranquilidad pública y a la seguridad;

Que, mediante Decreto Supremo N° 083-2015-PCM, publicado el 4 de diciembre de 2015, se declara por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, computado a partir de la fecha de publicación del acotado dispositivo, el Estado de Emergencia en la Provincia Constitucional del Callao, disponiendo que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno;

Que, posteriormente, con Decretos Supremos N°s 004-2016-PCM, 013-2016-PCM y 024-2016-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia declarado en la Provincia Constitucional del Callao, por cuarenta y cinco (45) días calendario adicionales, del 18 de enero al 2 de marzo de 2016, del 3 de marzo al 16 de abril de 2016 y del 17 de abril al 31 de mayo de 2016, respectivamente;

Que, con Decreto Supremo N° 036-2016-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia declarado en la Provincia Constitucional del Callao, por sesenta (60) días calendario, a partir del 1 de junio de 2016;

Que, con Decreto Supremo N° 056-2016-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia declarado en la Provincia Constitucional del Callao, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 31 de julio de 2016;

Que, mediante Oficio N° 576-2016-DGPNP/SA, el Director General de la Policía Nacional del Perú recomienda que se prorrogue el Estado de Emergencia declarado en la Provincia Constitucional del Callao por Decreto Supremo N° 083-2015-PCM, sustentando dicha petición en el Oficio N° 92-2016-DIRNOP-REGPOL CALLAO/JEM-UNIPLO y en el Informe N° 096-2016-REGPOL CALLAO/JEM-UNIPLO, emitidos por la Región Policial Callao, a fin de consolidar la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado en todas sus modalidades;

Que, el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú establece que la prórroga del Estado de Emergencia requiere nuevo Decreto;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4) y 14) del artículo 118, el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, y los literales b) y d) del

numeral 2) del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

**Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia**

Prorrogar el Estado de Emergencia por el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir del 30 de agosto de 2016, en la Provincia Constitucional del Callao. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno.

**Artículo 2.- Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales**

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere el artículo anterior y en la circunscripción señalada en el mismo, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales y la inviolabilidad de domicilio, comprendidos en los incisos 9) y 24) apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

**Artículo 3.- Refrendo**

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior y la Ministra de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD  
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI  
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS  
Ministro del Interior

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO  
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, and, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, has the honour to inform it that, by Supreme Decree No. 066-2016-PCM issued on 27 August 2016 (copy attached), the state of emergency in the Constitutional Province of Callao has been extended for 45 days, with effect from 30 August 2016.

During the state of emergency, the rights relating to liberty and security of person and the inviolability of the home, recognized in article 2, paragraphs 9 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru and in articles 17 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, respectively, are suspended.

The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to convey to the Secretariat the renewed assurances of its highest consideration.

New York, 14 September 2016

**Extension of the state of emergency declared in the Constitutional Province of Callao**

**Supreme Decree No. 066-2016-PCM**

The President of the Republic

Considering:

That article 44 of the Political Constitution of Peru provides that the primary duties of the State include guaranteeing the full enjoyment of fundamental rights, protecting the population from security threats and promoting the general welfare based on justice and the comprehensive and balanced development of the nation;

That, furthermore, article 137 of the Constitution provides that the President of the Republic may, with the consent of the Council of Ministers and upon notifying Congress or the Standing Committee, declare the states of emergency stipulated therein, for a fixed duration and throughout the national territory or in a part thereof, including a state of emergency declared in the event of a disturbance of the peace or public order, a disaster, or serious circumstances affecting the life of the nation, during which time the exercise of the constitutional rights of liberty and security of person, inviolability of the home, freedom of assembly and freedom of movement in the territory may be restricted or suspended;

That the constitutional Government has an obligation to guarantee the right of citizens to order, public peace and security;

That, by Supreme Decree No. 083-2015-PCM, issued on 4 December 2015, a state of emergency was declared in the Constitutional Province of Callao for a period of forty-five (45) calendar days, with effect from the date of issuance of that instrument, which provides that the National Police of Peru shall maintain control of public order;

That, subsequently by Supreme Decree Nos. 004-2016-PCM, 013-2016-PCM and 024-2016-PCM, the state of emergency declared in the Constitutional Province of Callao was extended for an additional period of forty-five (45) calendar days, from 18 January to 2 March 2016, from 3 March to 16 April 2016 and from 17 April to 31 May 2016, respectively;

That, by Supreme Decree No. 036-2016-PCM, the state of emergency declared in the Constitutional Province of Callao was extended for a period of sixty (60) calendar days, with effect from 1 June 2016;

That, by Supreme Decree No. 056-2016-PCM, the state of emergency declared in the Constitutional Province of Callao was extended for a period of thirty (30) calendar days, with effect from 31 July 2016;

That, by means of note No. 576-2016-DGP/SA, the Director General of the National Police of Peru recommended that the state of emergency declared by Supreme Decree No. 083-2015-PCM in the Constitutional Province of Callao be extended, basing that recommendation on note No. 92-2016-DIRNOP-REGPOL CALLAO/JEM-UNIPLO and report No. 096-2016-REGPOL CALLAO/JEM-UNIPLO from the Callao Police Region, in order to strengthen efforts against public insecurity and organized crime in all its forms;



That article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru provides that the extension of a state of emergency requires a new decree;

In accordance with article 118, paragraphs 4 and 14, and article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru, and article 4, paragraphs 2 (b) and 2 (d), of Act No. 29158, Organic Law of the Executive Branch; and

With the approval of the Council of Ministers and subject to notification of the Congress of the Republic;

Hereby decrees:

Article 1: Extension of the state of emergency

The state of emergency in the Constitutional Province of Callao is hereby extended for a period of forty-five (45) calendar days, with effect from 30 August 2016. The National Police of Peru shall maintain public order.

Article 2: Suspension of constitutional rights

During the state of emergency and in the location referred to in the preceding article, the constitutional rights relating to liberty and security of person and the inviolability of the home, recognized in article 2, paragraphs 9 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru, shall be suspended.

Article 3: Endorsement

The present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of Ministers, the Minister of the Interior and the Minister of Justice and Human Rights.

Done at Government House, Lima, on 26 August 2016.

Pedro Pablo Kuczynski Godard  
President of the Republic

Fernando Zavala Lombardi  
President of the Council of Ministers

Carlos Basombrío Iglesias  
Minister of the Interior

María Soledad Pérez Tello  
Minister of Justice and Human Rights

[TRANSLATION – TRADUCTION]

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments à la Section des traités du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l'Organisation et, en application des dispositions de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l'honneur de l'informer qu'aux termes du décret suprême n° 066-2016-PCM, publié le 27 août 2016 et dont le texte est joint à la présente, l'état d'urgence est déclaré, pour une durée de 45 jours commençant le 30 août 2016, dans la province constitutionnelle du Callao.

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence, l'exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l'inviolabilité du domicile consacrés aux paragraphes 9 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement.

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

New York, le 14 septembre 2016

## **Prorogation de l'état d'urgence déclaré dans la province constitutionnelle du Callao**

### **Décret suprême n° 066-2016-PCM**

Le Président de la République,

Considérant :

Que l'article 44 de la Constitution politique du Pérou dispose que l'État est tenu de garantir la pleine jouissance des droits fondamentaux, de protéger la population des risques menaçant sa sécurité et de veiller au bien-être général, fondé sur la justice et le développement intégral et équilibré de la nation ;

Que l'article 137 de la Constitution dispose que le Président de la République peut décréter, avec l'accord du Conseil des ministres et l'obligation d'en informer le Congrès et la Commission permanente, pour une durée déterminée, dans la totalité ou une partie du territoire national, les régimes d'exception y visés, notamment l'état d'urgence, décrété en cas de perturbation de la paix ou de l'ordre public, de catastrophe ou de situation grave troublant la vie de la nation, durant lequel peut être restreint ou suspendu l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire ;

Que le Gouvernement est tenu de garantir le droit des citoyens à l'ordre, la tranquillité publique et la sécurité ;

Que, par le décret suprême n° 083-2015-PCM publié le 4 décembre 2015, un état d'urgence a été déclaré dans la province constitutionnelle du Callao, pour une durée de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter du jour de la publication dudit instrument, disposant que la Police nationale du Pérou maintiendra le contrôle de l'ordre public ;

Que, par la suite, par les décrets suprêmes n°s 004-2016-PCM, 013-2016-PCM et 024-2016-PCM, l'état d'urgence dans la province constitutionnelle du Callao a été prorogé pour une durée supplémentaire de quarante-cinq (45) jours calendaires, du 18 janvier au 2 mars 2016, du 3 mars au 16 avril 2016 et du 17 avril au 31 mai 2016, respectivement ;

Que, par le décret suprême n° 036-2016-PCM, l'état d'urgence déclaré dans la province constitutionnelle du Callao a été prorogé pour une durée de soixante (60) jours calendaires à compter du 1<sup>er</sup> juin 2016 ;

Que, par le décret suprême n° 056-2016-PCM, l'état d'urgence déclaré dans la province constitutionnelle du Callao a été prorogé pour une durée de trente (30) jours calendaires à compter du 31 juillet 2016 ;

Que, par sa communication n° 576-2016-DGPNP/SA, le Directeur général de la Police nationale du Pérou a recommandé que soit prorogé l'état d'urgence déclaré par le décret suprême n° 083-2015-PCM dans la province constitutionnelle du Callao afin de renforcer la lutte contre l'insécurité des citoyens et la criminalité organisée sous toute ses formes, fondant sa recommandation sur la communication n° 92-2016-DIRNOP-REGPOL CALLAO/JEM-UNIPLD et sur le rapport n° 096-2016-REGPOL CALLAO/JEM-UNIPLD de la Police de la région du Callao ;

Qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou, l'état d'urgence se proroge par décret suprême ;

Conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 4 et 14 de l'article 118 et au paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou, et aux alinéas b) et d) du paragraphe 2 de l'article 4 de la loi n° 29158 (loi relative à l'organisation du pouvoir exécutif) ; et

Après avis favorable du Conseil des ministres, le Congrès de la République devant en être informé ;

Décète :

Article premier - Prorogation de l'état d'urgence

Est prorogé pour une durée de quarante-cinq (45) jours calendaires, à compter du 30 août 2016, l'état d'urgence dans la province constitutionnelle du Callao. La Police nationale du Pérou maintiendra l'ordre public.

Article 2 - Suspension de l'exercice des droits constitutionnels

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence déclaré à l'article premier et dans la circonscription y visée, l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l'inviolabilité du domicile, garantis aux paragraphes 9 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou.

Article 3 - Contreseing

Le présent décret suprême est contresigné par le Président du Conseil des ministres, le Ministre de l'intérieur et le Ministre de la justice et des droits de l'homme.

Fait au Palais présidentiel, à Lima, le vingt-six août deux mille seize.

Le Président de la République  
Pedro Pablo Kuczynski Godard

Le Président du Conseil des ministres  
Fernando Zavala Lombardi

Le Ministre de l'intérieur  
Carlos Basombrío Iglesias

La Ministre de la justice et des droits de l'homme  
María Soledad Pérez Tello

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

**Peru**

*Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:  
14 September 2016*

*Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 14 September 2016*

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE  
L'ARTICLE 4

**Pérou**

*Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 14 septembre 2016*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 14 septembre 2016*

[ TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL ]

Misión Permanente del Perú  
ante las Naciones Unidas

Permanent Mission of Peru to  
the United Nations

7-1-SG/ 76

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas presenta sus atentos saludos a la Secretaría General de las Naciones Unidas – Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 4° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene a honra informar que, mediante Decreto Supremo N° 070-2016-PCM publicado el pasado 11 de septiembre, cuya copia se acompaña, se prorrogó por treinta días, a partir del 11 de septiembre de 2016, el Estado de Emergencia declarado en los distritos de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay y Pucacolpa de la provincia de Huanta; en los distritos de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchiway de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Saicabamba, Saicahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble y Andaymarca de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en los distritos de Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La Convención del departamento del Cusco; en los distritos de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo de la provincia de Salpo; en los distritos de Andamarca y Comas, de la provincia de Concepción; y, en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de Junín.

Durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24 apartado (f) del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú, y en los Artículos 17°, 12°, 21° y 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas aprovecha la oportunidad para renovar a la Secretaría General de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta distinguida consideración.

Nueva York, 14 de septiembre de 2016

**Declaración y prórroga de Estado de Emergencia en diversos distritos y provincias de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín**

**DECRETO SUPREMO  
N° 070-2016-PCM**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2016-PCM, publicado el 12 de julio de 2016, se prorroga por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 13 de julio de 2016, el Estado de Emergencia en los distritos de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay y Pucacolpa de la provincia de

Huanta; en los distritos de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchiuay de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, ~~Salcabamba~~, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble y Andaymarca de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en los distritos de Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La Convención del departamento del Cusco; en los distritos de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo de la provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y Comas, de la provincia de Concepción; y, en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de Junín;

Que, mediante la Ley N° 30445, publicada el 29 de mayo de 2016, se creó el distrito de Santiago de Tucuma, con su capital Santiago de Tucuma, en la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica;

Que, mediante la Ley N° 30457, publicada el 15 de junio de 2016, se creó el distrito de Oronccooy, con su capital Oronccooy, en la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho;

Que, asimismo, mediante la Ley N° 30481, publicada el 06 de julio de 2016, se creó el distrito de Megantoni, con su capital el centro poblado de Camisea, en la provincia de La Convención del departamento de Cusco;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1095, se establece el marco legal que regula los principios,

formas, condiciones y límites para el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en su Título II se establecen las normas del uso de la fuerza en otras situaciones de violencia, en zonas declaradas en Estado de Emergencia con el control del orden interno a cargo de la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de su función constitucional, mediante el empleo de su potencialidad y capacidad coercitiva para la protección de la sociedad, en defensa del Estado de Derecho;

Que, el artículo 3 del acotado Decreto Legislativo N° 1095 establece que se considera grupo hostil a la pluralidad de individuos en el territorio nacional que reúnen tres condiciones: (i) están mínimamente organizados; (ii) tienen capacidad y decisión de enfrentar al Estado, en forma prolongada por medio de armas de fuego; y, (iii) participan en las hostilidades o colaboran en su realización;

Que, mediante Decreto Supremo N° 085-2015-PCM, de fecha 10 de diciembre de 2015, se delimita el ámbito de aplicación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en las zonas del VRAEM que se encuentran en Estado de Emergencia, orientando su misionamiento en contrarrestar los remanentes terroristas, así como en la lucha frontal contra el Tráfico Ilícito de Drogas y otras actividades ilícitas, respectivamente;

Que, en ese orden de ideas, resulta oportuno precisar que los remanentes terroristas constituyen un grupo hostil, toda vez que reúnen las condiciones antes señaladas;

Que, de acuerdo con lo manifestado por el Director General de la Policía Nacional del Perú, mediante el Oficio N° 612-2016-DGPNP/SA, de fecha 01 de setiembre de 2016, aún subsisten las condiciones que determinaron la declaratoria del Estado de Emergencia en las provincias y distritos anteriormente indicados, por lo que es necesario prorrogar el estado de emergencia por el plazo de 30 días calendario adicionales, a fin que la presencia de la Policía Nacional del Perú, con sus correspondientes acciones, permita que la población se identifique con los fines u objetivos que busca el Gobierno Nacional, esto es, la consolidación de la pacificación de la zona y del país;

Que, asimismo, la Policía Nacional del Perú solicita que se declare el Estado de Emergencia en el distrito de Santiago de Tucuma, de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; distrito de Oroncoy, de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho, y en el distrito de Megantoni, de la provincia de La Convención del departamento de Cusco, atendiendo a que dichos distritos se encuentran enclavados dentro de provincias declaradas en Estado de Emergencia;

Que, el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, establece que la prórroga del Estado de Emergencia requiere de un nuevo Decreto Supremo;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, se precisa el uso de la fuerza en el ejercicio de la función policial, los niveles del uso de la fuerza y las circunstancias y reglas de conducta en el uso de la fuerza;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4) y 14) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República.

DECRETA:

**Artículo 1.- Declaración de Estado de Emergencia**  
Declarar por el término de treinta (30) días calendario, a partir del 11 de setiembre de 2016, el Estado de Emergencia en el distrito de Santiago de Tucuma, de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en el distrito de Oroncoy, de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho, y en el distrito de Megantoni, de la provincia de La Convención del departamento de Cusco.

**Artículo 2.- Prórroga de Estado de Emergencia**  
Prorrogar por el término de treinta (30) días calendario, a partir del 11 de setiembre de 2016, el Estado

de Emergencia en los distritos de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay y Puacocolpa de la provincia de Huanta; en los distritos de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchiway de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble y Andaymarca de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en los distritos de Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La Convención del departamento del Cusco; en los distritos de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo de la provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y Comas, de la provincia de Concepción; y, en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de Junín.

**Artículo 3.- Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales**

Durante el Estado de Emergencia a que se refieren los artículos precedentes y en las circunscripciones señaladas en los mismos, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24), apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

**Artículo 4.- Control del Orden Interno**

Disponer que la Policía Nacional del Perú asuma el control del Orden Interno en tanto dure el Estado de Emergencia declarado en los distritos y provincias indicados en los artículos 1 y 2 del presente Decreto Supremo.

Las Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional del Perú para el logro de dicho objetivo en los departamentos, provincias y distritos declarados en Estado de Emergencia.

**Artículo 5.- De la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú**

La intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1095 y en el Decreto Legislativo N° 1186, respectivamente, así como a lo dispuesto en Decreto Supremo N° 085-2015-PCM, que dispone que las Fuerzas Armadas orientan su misionamiento en contrarrestar el accionar de los grupos hostiles (remanentes terroristas) y la Policía Nacional del Perú en su lucha frontal contra el Tráfico Ilícito de Drogas y otras actividades ilícitas.

**Artículo 6.- Refrendo**

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y la Ministra de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de setiembre del año dos mil dieciséis.

MERCEDES ROSALBA ARAOZ FERNANDEZ  
Segunda Vicepresidenta de la República  
Encargada del despacho de la  
Presidencia de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI  
Presidente del Consejo de Ministros

MARIANO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  
Ministro de Defensa

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS  
Ministro del Interior

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO  
Ministra de Justicia y Derechos Humanos



[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, and, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, has the honour to inform it that, by Supreme Decree No. 070-2016-PCM, issued on 11 September 2016 (copy attached), the state of emergency declared in the Districts of Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay and Pucacolpa in the Province of Huanta, in the Districts of San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari and Anchiuay in the Province of La Mar, Department of Ayacucho; in the Districts of Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintay Puncu, Roble and Andaymarca in the Province of Tayacaja, Department of Huancavelica; in the Districts of Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina and Villa Virgen in the Province of La Convención, Department of Cusco; in the Districts of Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene and Río Tambo in the Province of Satipo, in the Districts of Andamarca and Comas in the Province of Concepción, and in the Districts of Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca in the Province of Huancayo, Department of Junín, has been extended for 30 days, with effect from 11 September 2016.

During the state of emergency, the rights relating to liberty and security of person, inviolability of the home, freedom of assembly and freedom of movement within the territory, recognized in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru and in articles 17, 12, 21 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, are suspended.

The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to convey to the Secretariat the renewed assurances of its highest consideration.

New York, 14 September 2016

**Declaration and extension of the state of emergency in various districts and provinces of the Departments of Ayacucho, Huancavelica, Cusco and Junín**

**Supreme Decree No. 070-2016-PCM**

The President of the Republic

Considering:

That, by Supreme Decree No. 044-2016-PCM, issued on 12 July 2016, the state of emergency in the Districts of Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay and Pucacolpa in the Province of Huanta, in the Districts of San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari and Anchiuay in the Province of La Mar, Department of Ayacucho; in the Districts of Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintay Puncu, Roble and Andaymarca in the Province of Tayacaja, Department of Huancavelica; in the Districts of Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina and Villa Virgen in the Province of La Convención, Department of Cusco; in the Districts of Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene and Río Tambo in the Province of Satipo, in the Districts of Andamarca and Comas in the Province of Concepción, and in the Districts of Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca in the Province of Huancayo, Department of Junín, was extended for 60 calendar days, with effect from 13 July 2016;

That under Act No. 30445, published on 29 May 2016, the District of Santiago de Tucuma in the Province of Tayacaja, Department of Huancavelica, was formed, with Santiago de Tucuma as its capital.

That under Act No. 30457, published on 15 June 2016, the District of Oroncco in the Province of La Mar, Department of Ayacucho, was formed, with Oroncco as its capital.

That, furthermore, under Act No. 30481, published on 6 July 2016, the District of Megantoni in the Province of La Convención, Department of Cusco, was formed, with the town of Camisea as its capital.

That Legislative Decree No. 1095 established the legal framework governing the principles, forms, conditions and limits concerning the use of force by the armed forces in the national territory; and the rules for the use of force in other violent situations, in areas in which a state of emergency has been declared and where the National Police of Peru is responsible for public order, discharging its constitutional duties by using its powers and enforcement capabilities to protect society and defend the rule of law, are set forth in Title II thereof;

That pursuant to article 3 of Legislative Decree No. 1095, hostile groups are defined as a plurality of individuals in the national territory who (i) have a minimum degree of organization; (ii) have the capacity and intention of confronting the State in a prolonged manner by means of firearms; and (iii) participate in hostilities or collaborate in their realization;

That Supreme Decree No. 085-2015-PCM, of 10 December 2015, set out the limits of the scope of action of the armed forces and the National Police of Peru in the areas of the valley of the Apurímac, Ene and Mantaro rivers in which a state of emergency has been declared, their mission being to counteract the remaining terrorists and to carry out a frontal assault on the illicit trafficking in drugs and other illegal activities, respectively;

That in this connection, the remaining terrorists constitute a hostile group, falling under the aforementioned definition;

That, in accordance with the report of the Director General of the National Police of Peru, in note No. 612-2016-DGPNP/SA dated 1 September 2016, the circumstances that gave rise to the declaration of a state of emergency in the above-mentioned provinces and districts still prevail; and that it is therefore necessary to extend it for an additional period of 30 calendar days, in order to enable the population, through the presence and corresponding action of the National Police of Peru, to identify with the ends or objectives sought by the national Government, namely the consolidation of peace in the area and in the country as a whole;

That, in addition, the National Police of Peru requested that a state of emergency be declared in the District of Santiago de Tucuma in the Province of Tayacaja, Department of Huancavelica; in the District of Oronccoy in the Province of La Mar, Department of Ayacucho, and in the District of Megantoni in the Province of La Convención, Department of Cusco, in light of the fact that these districts are located within the provinces where a state of emergency has been declared;

That article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru provides that the extension of a state of emergency requires a new Supreme Decree;

That Legislative Decree No. 1186, the Legislative Decree regulating the use of force by the National Police of Peru, clarifies the use of force in the performance of police duties, the levels of use of force, the circumstances in which force may be used and the rules of conduct in the use of force;

In accordance with article 118, paragraphs 4 and 14, of the Political Constitution of Peru; and

With the approval of the Council of Ministers and subject to notification of the Congress of the Republic;

Hereby decrees:

Article 1: Declaration of a state of emergency

A state of emergency in the District of Santiago de Tucuma in the Province of Tayacaja, Department of Huancavelica; in the District of Oronccoy in the Province of La Mar, Department of Ayacucho; and in the District of Megantoni in the Province of La Convención, Department of Cusco, is hereby declared for a period of thirty (30) calendar days, with effect from 11 September 2016.

Article 2: Extension of the state of emergency

The state of emergency in the Districts of Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay and Pucacolpa in the Province of Huanta, in the Districts of San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari, and Anchiway in the Province of La

Mar, Department of Ayacucho; in the Districts of Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintay Puncu, Roble and Andaymarca in the Province of Tayacaja, Department of Huancavelica; in the Districts of Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina and Villa Virgen in the Province of La Convención, Department of Cusco; in the Districts of Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene and Río Tambo in the Province of Satipo, in the Districts of Andamarca and Comas in the Province of Concepción, and in the Districts of Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca in the Province of Huancayo, Department of Junín, is hereby extended for a period of thirty (30) calendar days, with effect from 11 September 2016.

Article 3: Suspension of constitutional rights

During the state of emergency and in the locations referred to in the preceding articles, the constitutional rights relating to liberty and security of person, inviolability of the home and freedom of assembly and of movement within the territory, recognized in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f) of the Political Constitution of Peru, shall be suspended.

Article 4: Maintenance of public order

The National Police of Peru shall be responsible for maintaining public order during the state of emergency declared in the districts and provinces indicated in articles 1 and 2 hereof.

The armed forces shall assist the National Police of Peru in achieving this objective in the departments, provinces and districts in which a state of emergency has been declared.

Article 5: Parameters of action by the armed forces and the National Police of Peru

The armed forces and the National Police of Peru shall act in accordance with Legislative Decree Nos. 1095 and 1186, respectively, as well as with the provisions of Supreme Decree No. 085-2015-PCM, which provides that the mission of the armed forces shall be to counteract hostile groups (the remaining terrorists) and the mission of the National Police of Peru shall be to carry out a frontal assault on the illicit trafficking in drugs and other illegal activities.

Article 6: Endorsement

The present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of Ministers, the Minister of Defence, the Minister of the Interior and the Minister of Justice and Human Rights.

Done at Government House, Lima, on 10 September 2016.

Mercedes Rosalba Araoz Fernandez  
Second Vice President of the Republic  
in charge of the Office of the President of the Republic

Fernando Zavala Lombardi  
President of the Council of Ministers

Mariano González Fernández  
Minister of Defense

Carlos Basombrío Iglesias  
Minister of the Interior

María Soledad Pérez Tello  
Minister of Justice and Human Rights

[TRANSLATION – TRADUCTION]

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments à la Section des traités du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l'Organisation et, en application des dispositions de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l'honneur de l'informer qu'aux termes du décret suprême n° 070-2016-PCM, publié le 11 septembre 2016 et dont le texte est joint à la présente, l'état d'urgence déclaré dans les districts de Huanta, d'Ayahuanco, de Santillana, de Chaca, de Sivia, de Llochegua, de Canayre, d'Uchuraccay et de Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, d'Anco, d'Ayna, de Chungui, de Santa Rosa, de Tambo, de Samugari, d'Anchihuay de la province de La Mar (département d'Ayacucho), dans les districts de Pampas, de Huachocolpa, de Quishuar, de Salcabamba, de Salcahuasi, de Surcubamba, de Tintay Puncu, de Roble et d'Andaymarca de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari, de Vilcabamba, d'Inkawasi, de Villa Kintiarina et de Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans les districts de Llaylla, de Mazamari, de Pampa Hermosa, de Pangoa, de Vizcatán del Ene et de Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts d'Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín), a été prorogé pour une durée de 30 jours commençant le 11 septembre 2016.

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence, l'exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

New York, le 14 septembre 2016

**Déclaration et Prorogation de l'état d'urgence dans les districts et provinces des départements d'Ayacucho, de Huancavelica, de Cusco et de Junín**

**Décret suprême n° 070-2016-PCM**

Le Président de la République,

Considérant :

Que, par le décret suprême n° 044-2016-PCM, publié le 12 juillet 2016, l'état d'urgence a été prorogé pour une durée de soixante (60) jours calendaires commençant le 13 juillet 2016 dans les districts de Huanta, d'Ayahuanco, de Santillana, de Chaca, de Sivia, de Llochegua, de Canayre, d'Uchuraccay et de Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, d'Anco, d'Ayna, de Chungui, de Santa Rosa, de Tambo, de Samugari, d'Anchihuay de la province de La Mar (département d'Ayacucho), dans les districts de Pampas, de Huachocolpa, de Quishuar, de Salcabamba, de Salcahuasi, de Surcubamba, de Tintay Puncu, de Roble et d'Andaymarca de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari, de Vilcabamba, d'Inkawasi, de Villa Kintiarina et de Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans les districts de Llaylla, de Mazamari, de Pampa Hermosa, de Pangoa, de Vizcatán del Enc et de Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts d'Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín) ;

Que par la loi n° 30445, publiée le 29 mai 2016, a été créé le district de Santiago de Tucuma, avec son capital Santiago de Tucuma, dans la province de Tayacaja du département de Huancavelica ;

Que par la loi n° 30457, publiée le 15 juin 2016, a été créé le district d'Oronccooy, avec son capital Oronccooy, dans la province de La Mar du département d'Ayacucho ;

Que, de même, par la loi n° 30481, publiée le 6 juillet 2016, a été créé le district de Megantoni, avec son capital le centre-ville de Camisea, dans la province de La Convención du département de Cusco ;

Que, par le Décret législatif n° 1095, a été établi le cadre légal qui régit les principes, formes, conditions et limites pour l'emploi et l'usage de la force par les forces armées sur le territoire national et que le Titre II de ce Décret énonce les normes sur l'usage de la force en d'autres situations de violence, dans des zones pour lesquelles l'état d'urgence a été déclaré, le contrôle de l'ordre interne étant à la charge de la Police nationale du Pérou dans l'accomplissement de sa fonction constitutionnelle, par l'usage de son potentiel et sa capacité coercitive pour la protection de la société, en défense de l'état de droit ;

Qu'aux termes de l'article 3 du Décret législatif n° 1095, est réputée groupe hostile toute pluralité d'individus se trouvant sur le territoire national et réunissant les trois conditions suivantes : i) avoir un degré minimum d'organisation ; ii) posséder la capacité d'affronter l'État et être décidé à le faire, de manière prolongée, au moyen d'armes à feu ; iii) participer aux hostilités ou collaborer à leur réalisation ;

Que par le décret suprême n° 085-2015-PCM, en date du 10 décembre 2015, a été délimité le champ d'action des forces armées et de la Police nationale du Pérou dans les zones de la vallée des rivières d'Apurimac, d'Ène et de Mantaro se trouvant sous régime d'état d'urgence, leur mission consistant dans l'ensemble à combattre les terroristes restants et à mener une lutte frontale contre le trafic illicite de stupéfiants et autres activités illicites, respectivement ;

Que, dans cet ordre d'idées, il convient de préciser que les terroristes restants constituent un groupe hostile, étant donné qu'ils réunissent les conditions précitées ;

Que, conformément à ce qui a été précisé par le Directeur général de la Police nationale du Pérou, dans la communication officielle n° 612-2016-DGPNP/SA, en date du 1<sup>er</sup> septembre 2016, sont encore présentes les conditions qui ont motivé la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces et districts susmentionnés, d'où la nécessité de le proroger pour une durée supplémentaire de 30 jours calendaires, afin que la présence de la Police nationale du Pérou permette, moyennant la prise des mesures correspondantes par elle, que la population s'identifie aux buts ou objectifs recherchés par le Gouvernement national, à savoir la consolidation de la pacification de la zone et du pays ;

Qu'en outre, la Police nationale du Pérou a sollicité que soit déclaré un état d'urgence dans le district de Santiago de Tucuma de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans le district d'Oroncoy de la province de La Mar (département d'Ayacucho) et dans le district de Megantoni de la province de La Convención (département de Cusco) étant donné que lesdits districts se trouvent dans la circonscription des provinces déclarées en état d'urgence ;

Qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou, l'état d'urgence se proroge par décret suprême ;

Que, conformément au Décret législatif n° 1186, qui régit l'usage de la force par la Police nationale du Pérou, l'usage de la force dans l'exercice de la fonction policière est requise, ainsi que les niveaux de son usage, de même que les circonstances et règles de conduite applicables à l'usage de la force ;

Conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 4 et 14 de l'article 118 de la Constitution politique du Pérou ; et

Après avis favorable du Conseil des ministres, le Congrès de la République devant en être informé ;

Décrète :

Article premier - Déclaration de l'état d'urgence

Est déclaré pour une durée de trente (30) jours calendaires, à compter du 11 septembre 2016, l'état d'urgence dans le district de Santiago de Tucuma de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans le district d'Oroncoy de la province de La Mar (département d'Ayacucho) et dans le district de Megantoni de la province de La Convención (département de Cusco).



#### Article 2 - Prorogation de l'état d'urgence

Est prorogé pour une durée de trente (30) jours calendaires, à compter du 11 septembre 2016, l'état d'urgence dans les districts de Huanta, d'Ayahuanco, de Santillana, de Chaca, de Sivia, de Llochegua, de Canayre, d'Uchuraccay et de Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, d'Anco, d'Ayna, de Chungui, de Santa Rosa, de Tambo, de Samugari, d'Anchihuay de la province de La Mar (département d'Ayacucho), dans les districts de Pampas, de Huachocolpa, de Quishuar, de Salcabamba, de Salcahuasi, de Surcubamba, de Tintay Puncu, de Roble et d'Andaymarca de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari, de Vilcabamba, d'Inkawasi, de Villa Kintiarina et de Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans les districts de Llaylla, de Mazamari, de Pampa Hermosa, de Pangoa, de Vizcatán del Ene et de Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts d'Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).

#### Article 3 - Suspension de l'exercice des droits constitutionnels

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence déclaré aux articles précédents et dans les circonscriptions y visées, l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, garantis aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou.

#### Article 4 - Maintien de l'ordre public

La Police nationale du Pérou assure le maintien de l'ordre public pendant toute la durée de l'état d'urgence dans les districts et provinces indiqués aux articles 1 et 2 du présent décret.

Les forces armées soutiennent la Police nationale du Pérou dans la réalisation de cet objectif dans les départements, provinces et districts placés sous le régime de l'état d'urgence.

#### Article 5 - De l'intervention des forces armées et de la Police nationale du Pérou

L'intervention des forces armées et de la Police nationale du Pérou obéit aux conditions prévues par les Décrets législatifs n<sup>os</sup> 1095 et 1186, respectivement, et aux dispositions du décret suprême n<sup>o</sup> 085-2015-PCM, qui donne pour mandat aux forces armées de combattre les agissements des groupes hostiles (les terroristes restants) et à la Police nationale du Pérou de mener une lutte frontale contre le trafic illicite de stupéfiants et autres activités illicites.

#### Article 6 - Contresigning

Le présent décret suprême est contresigné par le Président du Conseil des ministres, le Ministre de la défense, le Ministre de l'intérieur et le Ministre de la justice et des droits de l'homme.

Fait au Palais présidentiel, à Lima, le dix septembre deux mille seize.

La deuxième Vice-Présidente de la République  
chargée de la Présidence de la République  
Mercedes Rosalba Araoz Fernandez

Le Président du Conseil des ministres  
Fernando Zavala Lombardi

Le Ministre de la Défense  
Mariano González Fernández

Le Ministre de l'intérieur  
Carlos Basombrio Iglesias

La Ministre de la justice et des droits de l'homme  
María Soledad Pérez Tello

SECOND OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS, AIMING AT THE ABOLITION OF THE DEATH PENALTY. NEW YORK, 15 DECEMBER 1989 [*United Nations, Treaty Series, vol. 1642, A-14668.*]

ACCESSION

**Dominican Republic**

*Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:  
21 September 2016*

*Date of effect: 21 December 2016*

*Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 21 September 2016*

ACCESSION

**Togo**

*Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:  
14 September 2016*

*Date of effect: 14 December 2016*

*Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 14 September 2016*

DEUXIÈME PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES VISANT À ABOLIR LA PEINE DE MORT. NEW YORK, 15 DÉCEMBRE 1989 [*Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1642, A-14668.*]

ADHÉSION

**République dominicaine**

*Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 21 septembre 2016*

*Date de prise d'effet : 21 décembre 2016*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 21 septembre 2016*

ADHÉSION

**Togo**

*Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 14 septembre 2016*

*Date de prise d'effet : 14 décembre 2016*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 14 septembre 2016*

*OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY  
EL SALVADOR UPON ACCESSION*

**Togo**

*Notification deposited with the Secretary-  
General of the United Nations:  
14 September 2016*

*Registration with the Secretariat of the  
United Nations: ex officio, 14 September  
2016*

*OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR  
EL SALVADOR LORS DE L'ADHÉSION*

**Togo**

*Dépôt de la notification auprès du  
Secrétaire général de l'Organisation  
des Nations Unies : 14 septembre 2016*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de  
l'Organisation des Nations Unies :  
d'office, 14 septembre 2016*

[ TEXT IN FRENCH – TEXTE EN FRANÇAIS ]

Le Gouvernement Togolais, qui a choisi d'être abolitionniste sans réserve, a examiné la réserve formulée par le Gouvernement salvadorien à l'article 2 du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Le Gouvernement Togolais rappelle qu'en stipulant à son article 1 alinéa 1 qu'« aucune personne relevant de la juridiction d'un État partie au présent Protocole ne sera exécutée », le Protocole engage précisément et sans ambiguïté les États parties à l'abolition, en toutes circonstances et sans exclusive, de la peine de mort.

Or, en ne limitant pas expressément l'application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre, et en ne précisant pas les dispositions pertinentes de la législation interne salvadorienne qui s'appliquent en temps de guerre et qui doivent être communiquées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lors de l'adhésion, conditions fixées par le Protocole à son article 2, la réserve émise par le Gouvernement salvadorien contrevient à l'esprit et à la lettre du Protocole.

En conséquence, le Gouvernement Togolais fait objection à cette réserve. Toutefois, la présente objection n'exclut pas l'entrée en vigueur du Protocole entre la République Togolaise et la République d'El Salvador.

[TRANSLATION – TRADUCTION]<sup>1</sup>

The Togolese Government, which has chosen to be unreservedly abolitionist, has examined the reservation made by the Government of El Salvador to article 2 of the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty. The Togolese Government recalls that article 1, paragraph 1, of the Second Optional Protocol, by stipulating that “no one within the jurisdiction of a State Party to the present Protocol shall be executed”, specifically and unambiguously commits States Parties to abolish the death penalty under all circumstances and without exceptions.

However, by not explicitly limiting the application of the death penalty to the most serious crimes of a military nature committed during wartime or indicating the relevant provisions of El Salvador’s national legislation applicable during wartime, which must be communicated, at the time of accession, to the Secretary-General of the United Nations, as required by the provisions of article 2 of the Protocol, the reservation made by the Government of El Salvador is incompatible with the spirit and letter of the Protocol.

The Togolese Government therefore objects to the aforesaid reservation. However, this objection shall not preclude the entry into force of the Protocol between the Togolese Republic and the Republic of El Salvador.

---

<sup>1</sup> Translation provided by the Government of Togo – Traduction fournie par le Gouvernement du Togo.